

Revolución/contrarrevolución en México. La ofensiva contra el sector petro-eléctrico

John Saxe-Fernández

Profesor e investigador. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al gobierno de Felipe Calderón le correspondió organizar las celebraciones por el bicentenario de la Independencia así como las de la Revolución mexicana de 1910. En los dos ámbitos, sus programas y actos de gobierno, además de altamente significativos por sus impactos sobre la vigencia de la soberanía y las reivindicaciones de la Constitución de 1917, representan lo que solo puede calificarse como la culminación del persistente asalto oligárquico-imperial en vigor desde principios de la década de los 80 —por igual bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN)—, contra los ejes que motivan esas celebraciones: a) la soberanía nacional, fundamento de la «seguridad nacional» mexicana, y b) los principales ejes de acumulación (combustibles fósiles y electricidad), actividades reservadas a la nación según la Constitución.

En relación con el primer punto, se ofrecerá una reflexión, desde planteamientos interpretativos ofrecidos por Maurice Dobb, en torno a las tendencias que subyacen en los esquemas vigentes. Por lo que respecta al segundo, la atención también se dirige al estudio de la naturaleza y dimensión de la ofensiva

desplegada por los gobiernos priistas y panistas tendiente al desmantelamiento, privatización y extranjerización de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del sector eléctrico: un despliegue de «iniciativas» y acciones que en el curso del año 2010 incluye la aniquilación policial del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el decreto de «desaparición» de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y, también de manera igualmente significativa, una resolución de la Suprema Corte de Justicia contra el sindicato minero de Cananea, prácticamente a cien años de que esa organización social liderara la chispa que encendió el proceso revolucionario de 1910.

En 1906, cuatro años antes del estallido de la Revolución mexicana, y bajo la persecución y acorralamiento por una dictadura implacable, modernizadora y extranjerizante —la de Porfirio Díaz, cuyos «fundamentos» financieros estaban a punto de ser pulverizados por el *crack* de Wall Street de 1907—, los trabajadores de la Compañía de Gas y Luz Eléctrica Limitada, de la Hidroeléctrica de San Ildefonso, de la Nacional de Electricidad, y de Siemens y Halsky, decidieron organizarse para defender sus intereses colectivos. Dos años después y como resultado de sus

esfuerzos, quienes laboraban en la ciudad de México, ya bajo el paraguas de la Gran Liga de Electricistas Mexicanos, de corte cooperativista y mutualista, empezaron a establecer mecanismos de comunicación y de acción, de cara a las empresas eléctricas extranjeras.¹ Iniciada la Revolución, esa Liga hizo una amplia convocatoria a ingenieros mecánicos electricistas, telegrafistas, telefonistas, instaladores, motoristas y a todos los que, de manera directa o indirecta, se relacionaban con la industria eléctrica. A finales de 1914, cuando arreciaba la violencia y el caos, los empleados de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. (Mexican Light and Power Company) junto a otros trabajadores del ramo —en total unos trescientos—, fundaron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al cual pocos días después se afiliaron trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y de la Telefónica Ericsson. Con fuertes tendencias anarcosindicalistas, se alejó del cooperativismo y mutualismo para enfatizar las expresiones del interés de clase desde las bases, y abrió canales democráticos para el combate y defensa de los intereses obreros. Desde entonces, a lo largo del siglo xx, el SME encabezó luchas por la defensa del salario y de los contratos colectivos. Con el advenimiento de los regímenes «neoliberales», que operan bajo los lineamientos privatizadores del Consenso de Washington, articulados en México y en América Latina por medio de líneas de crédito altamente condicionados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el SME fue baluarte de la izquierda mexicana en la defensa de los preceptos constitucionales vigentes, relativos tanto al sector eléctrico como petrolero. Ciertamente, la meta de privatizar y extranjerizar primero la industria petrolera y luego, como se verá más adelante, el sector eléctrico, ha estado presente en la agenda estadounidense —y de la oligarquía mexicana—, desde que entró en vigor la Constitución de 1917, que enarbó el concepto de «dominio directo de la nación» sobre el petróleo y todos los recursos bajo la jurisdicción territorial del Estado-nación mexicano. La intención de Washington de revertir los preceptos constitucionales y la posterior nacionalización petrolera realizada por Lázaro Cárdenas en marzo de 1938, se ha planteado tanto al nivel operativo como político-administrativo.²

La agresión al SME y al Sindicato de Cananea, dos pilares del sindicalismo independiente mexicano, perpetrada en 2010, que lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores, jubilados y sus familias, se realiza en un contexto de procesos históricos, político-económicos, de corte doméstico e internacional que ameritan atención.

Los instrumentos imperiales

La experiencia reciente de América Latina muestra que, con el capitalismo, los instrumentos imperiales de control se amplían sin dejar a un lado, en momento alguno, el ingrediente militar y territorial. Los certeros estudios sobre el desarrollo capitalista y el imperialismo de Maurice Dobb,³ apuntan al uso de cuatro mecanismos, o de una combinación de ellos, para «imperializar»⁴ a otros países y pueblos por medio de: a) tarifas preferenciales; b) programas de inversión; c) colonización y d) instrumentos para el control abierto político-militar.

En el siglo xx, este esquema sintetiza una perspectiva de dominio internacional económico de los Estados Unidos que, en el caso de América Latina y el Caribe, se asemeja en su operación a la experiencia británica y a la planteada por los ideólogos nazis en torno a un bloque europeo continental encabezado por Alemania, con un fuerte ingrediente geopolítico y militar, que incluye la «guerra de conquista», como ocurre en Iraq-Afganistán-Pakistán. El almirante Michael Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, durante su visita a México —primera oficial de un Jefe de Estado Mayor registrada en la historia bilateral—, a principios de marzo de 2009, después de reafirmar el apoyo del Pentágono a la Iniciativa Mérida (IM) (un émulo del atroz Plan Colombia), dio aviso a la opinión pública mexicana de que las fuerzas armadas de su país «están listas para ayudar a México en su guerra contra el narco con tácticas de contrainsurgencia, como las empleadas contra los rebeldes de Iraq y Afganistán».⁵ Por lo que se refiere al Plan Colombia, recuérdese que Washington, antes de hacerlo en México con la IM, planteó ampliar el Plan Colombia hacia la región cocalera del Chapare en Bolivia, por medio del Plan Dignidad; la Iniciativa Regional Andina, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, los Tratados de Libre Comercio con Chile, Perú y Centroamérica, y su extensión hemisférica mediante el ALCA, una iniciativa sepultada por las naciones sudamericanas en Mar del Plata, 2005. Todo ello en medio de esquemas de ampliación de bases militares, en Colombia y Panamá en 2009; y apenas iniciado 2010, aprovechando el catastrófico terremoto que sufrió Haití, Washington —con un Secretario General de la ONU que se hizo a un lado—, procedió a la ocupación militar de ese país «por tiempo indefinido». Agréguese numerosos programas militares y de guerra política de los Estados Unidos, junto con una vasta ofensiva de privatizaciones impulsadas por los grandes monopolios, en especial los del petróleo, gas y minería con el acostumbrado respaldo del BM, FMI y BID, y el cuadro resultante es el de una inusitada

intensificación de la ofensiva imperial en la región, con líneas de continuidad fundamentales entre la belicista administración Bush/Cheney y la de Obama. En la mira tanto de esos intereses como de la oligarquía mexicana —siempre dispuesta a participar (de manera crónica como socio menor) en el reparto del botín—,⁶ se incluyen, de manera notable, los recursos naturales estratégicos y el complejo petro-eléctrico mexicano.

Las mayores implicaciones del fenómeno imperialista solo pueden apreciarse de manera cabal teniendo presente la estrecha relación entre lo histórico y lo geográfico. Es un asunto que se percibe al revisar la vasta extensión de los complejos económico-territoriales, urbanos, suburbanos, agrícolas, presentes en la operación cotidiana de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Alan Milward y Franz Newman han ilustrado este asunto y mostrado la forma en que el gran capital alemán articulaba concepciones sobre la «integración» similares a las de los Estados Unidos hasta nuestros días.⁷ Los ideólogos del nacionalsocialismo se inclinaron por adoptar y adaptar la Doctrina Monroe como «modelo», sin dejar de incluir la experiencia imperial/colonial británica. Las nociones germanas de «economías de grandes áreas», como ocurrió con la *Grand Area* planteada en el gobierno de Franklin D. Roosevelt, luego revivida por George Bush padre, William Clinton, y Bush hijo; con el TLCAN y el ALCA; y ahora con sus expresiones de «seguridad» y de «absorción jurisdiccional-territorial, tipo Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte —ente en proceso de «remodelamiento bautismal»— y la Iniciativa Mérida, corresponden a las ambiciones de clase, de corte económico y geopolítico de la burguesía estadounidense, como lo ha detallado el economista Jeff Faux.⁸ En ambos casos, las clases gobernantes de los Estados Unidos y México trataron de justificar políticas económicas en el ámbito internacional, resultado de decisiones económicas internas a las que se dio prioridad por encima de cualquier situación global. La comparación entre los planteamientos y acciones del liderato nacionalsocialista y las que se han emitido desde la Casa Blanca, a partir de Harry S. Truman, es justificada si se tiene presente que la forma predominante de capitalismo que se observó en la Alemania nazi trató también de vencer la crisis por medios coercitivos extremos, interna e internacionalmente. Tanto en un caso como el otro está presente una nueva división del mundo y la incautación de un «nuevo espacio vital» racionalizado con doctrinas de «ampliación», disfrazadas con la retórica del «globalismo pop», así como por justificaciones racistas e ideológicas, como la cruzada contra el «narcoterrorismo», y «la contrainsurgencia»,

para el intervencionismo en los asuntos internos de sus vecinos, máxime si hay grandes negocios de por medio.

El sector petro-eléctrico en la mira

La intervención de los Estados Unidos en México, multifacética y multisectorial, se centra en el sector petro-eléctrico (sin dejar de incidir sobre otros, como la minería, el agua, la biodiversidad), porque desde la perspectiva de las grandes firmas de la energía y, por tanto, del BM, la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial, tanto desde la perspectiva de las ganancias empresariales como de la geopolítica y la geoeconomía a ellas asociada.

Después de la Segunda guerra mundial, la simbiosis entre PEMEX, la CFE y LyFC fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura, por tratarse de la sinergia en el principal polo de acumulación del país. Aunque, con claras intenciones privatizadoras, extranjerizantes y antisindicales, el 10 de octubre de 2009 Felipe Calderón lanzó un asalto, como bien lo narra María E. Valdés Vega,⁹ utilizando a la Policía Federal, contra el SME y el edificio central, subestaciones, talleres, oficinas de LyFC, liquidando así, por decreto, a ese ente público.

El cambiante panorama sobre la magnitud del «negocio» ayuda a explicar el evento. Como lo he indicado en varias ocasiones, es notable que ahora, en el ámbito internacional, las empresas se inclinen por la adopción de las formas de organización y relación orgánica similares a las establecidas en México durante décadas, gracias a la existencia de PEMEX y a la nacionalización eléctrica realizada por el presidente López Mateos, mediante una integración *de facto* que elevó la actividad petro-eléctrica a un rango mayor como eje de acumulación. Ello colocó su contribución al fisco —y a la economía— en un orden de magnitud mayor que al de todas las empresas privadas —nacionales y extranjeras— «juntas».

A principios del siglo XXI, la tónica de las grandes empresas del ramo también es promover «el fin de las empresas petroleras tradicionales» dedicadas exclusivamente al petróleo, y la conformación de unidades mayores que integren el crudo con la electricidad, es decir, lo que desde hace años realiza el sector público mexicano. La sinergia es de primer orden, lo que explica que el BM opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos «graduales», pero significativos hasta ahora, para inducir la privatización, desmembramiento y desnacionalización del complejo petro-eléctrico mexicano.¹⁰ Por ejemplo, promueve los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) en grandes

La intervención de los Estados Unidos en México, multifacética y multisectorial, se centra en el sector petro-eléctrico (sin dejar de incidir sobre otros, como la minería, el agua, la biodiversidad), porque desde la perspectiva de las grandes firmas de la energía y, por tanto, del BM, la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial.

proyectos en los que participan empresas ajenas a PEMEX, encabezadas por Bechtel y Halliburton, ambas con estrechos vínculos con el aparato bélico-industrial, político y de «seguridad» de los Estados Unidos.

Con la «reforma energética» de 2009, las actividades sustantivas de PEMEX se abrieron de lleno al contratismo desenfrenado. Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano, están, además del BM, el Departamento de Energía norteamericano (DE) que exige «se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización». La «desincorporación» del sector petro-eléctrico es percibida por Washington como un área con oportunidades para la inversión y control por parte de sus grandes empresas, porque es un renglón altamente redituable y estratégico de la economía y de la integración territorial de México. Con el aval de los gobiernos neoliberales, desde los priístas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una masiva y brutal agresión de clase y antisindical, como se mostró en el proceso que desembocó en la firma del TLCAN, la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, y el mencionado asalto a LyFC y contra el SME, lo cual representa una regresión de dimensiones históricas solo equiparable a las grandes pérdidas territoriales del siglo XIX.¹¹

Con esta acción se hizo trizas «el pacto social que fundó el Estado mexicano tras el proceso revolucionario de principios del XX»,¹² fundamento sociopolítico, económico y jurídico-jurisdiccional que permite y aglutina fuerzas esenciales para la seguridad, defensa e integridad territorial de la Federación como un todo: «en medio del caos revolucionario surgió el Sindicato Mexicano de Electricistas el 14 de diciembre de 1914 con los obreros y empleados de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. [...] y otros empleados del ramo eléctrico»¹³. La actuación del SME en los principales acontecimientos que cimbraron la dinámica de clase del país fue la de una organización obrera transparente y alejada del charrismo y corrupción de la autocracia presidencial, y llegó al todavía más oscuro y entreguista período neoliberal como una cuña esencial

en la defensa del interés público nacional, como lo he reseñado en otra ocasión.¹⁴ En especial, su resistencia ha sido —y es— nodal ante lo que Emilio Krieger calificó de violaciones presidenciales a la Constitución, en este caso, las iniciativas de Salinas y Zedillo para modificar los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y una reforma legal que indicaba «qué no era» servicio público; con ese malabarismo lingüístico se dio entrada «legal» al capital privado en el sector, al poner bajo la categoría «no servicio público» a rubros como la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad. Los analistas del SME ofrecieron vitales datos técnicos, empresariales, de licitaciones, etc., sobre el inconstitucional proceso. Pero además, y esto es fundamental, movilizaron amplios sectores, más allá del área sindical: estudiantes universitarios, servidores públicos, parte de la clase media urbana, entre otros.¹⁵ El endoso de Washington al esquema privatizador desbordó el área técnico-económica (BM, BID, etc.) hacia el fortalecimiento de instrumentos de seguridad y de intervención político-electoral, bajo la pantalla del combate al crimen organizado y al narcotráfico, que, como en el caso del sindicalismo de la electricidad, también se utilizan como guerra de clase a favor del esquema oligárquico-imperial centrado en las privatizaciones.

Los intereses empresariales de la industria eléctrica, del gas y del petróleo de los Estados Unidos, que se articulan desde el DE, requieren de una «sombrija de seguridad» en México, ya que plantean explícitamente que solo con el «retiro» del Estado mexicano —y latinoamericano— de las áreas estratégicas es posible brindar ventajas a los inversionistas de su país, de cara a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petro-eléctrico mexicano, según fuentes oficiales del DE, «ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y, en muchos casos, realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país».¹⁶ La privatización del complejo petro-eléctrico (incluyendo, desde luego, el gas natural) es concebida por Washington y su Banco Mundial de manera integral; de ahí que para la nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor,

tanto económica como geopolíticamente; esto último, insisto, por la colindancia geográfica con los Estados Unidos. El asunto es planteado por el DE del siguiente modo:

[L]a privatización también ha desembocado en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras —particularmente aquellas con actividades importantes en la producción y/o distribución de gas natural— y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en el combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica, en parte por las ventajas ambientales relativas del gas natural sobre el carbón y el petróleo.¹⁷

El enfoque del DE representa la articulación de los intereses de los altos círculos de propietarios y gerentes de las grandes empresas que han impulsado la fusión «petro-eléctrica», entre las que sobresalen Enron —de triste memoria por su escandalosa y corrupta actuación—¹⁸ y El Paso, en Texas, así como las principales petroleras incluidas las que ofrecen «servicios». La prensa mexicana dio amplia cobertura al papel decisivo de Enron en el delineamiento del programa energético de Fox, llevado a cabo por su Secretario de Energía, Felipe Calderón. Se trata de un vórtice de intereses, de un «botín» de dimensiones billonarias que, como ha mostrado John Ross, está en el corazón mismo de la elección presidencial del 2 de julio de 2006 en la que destaca la ilegal intervención de Halliburton de México, el mayor subcontratista de PEMEX, «subsidiaria del titán de la industria petrolera con sede en Houston [...] la mega corporación del vicepresidente Dick Cheney y el mayor proveedor de los petroleros del planeta [que] realiza negocios en México desde hace muchos años».¹⁹ Después de mencionar que Calderón se comprometió a privatizar PEMEX, Ross destaca el delicado asunto, al señalar el papel de Cheney como vicepresidente de Bush y sus asociados de Halliburton:

[A]l ayudar y favorecer el robo de la elección presidencial del 2 de julio —2006— al izquierdista López Obrador [...] En su calidad de miembro del Consejo de Comunicación que agrupa a transnacionales con negocios en México, Halliburton ayudó a pagar un vil spot televisivo con contenido difamatorio, presentando a López Obrador como un peligro para México. Como solo los partidos políticos pueden montar campañas semejantes, la participación de Halliburton fue flagrantemente ilícita, según el máximo tribunal de México.²⁰

Corroborando el aserto de Ross, David DeGraw advierte que Calderón «fue declarado victorioso [...] con la ayuda de Bush, Dick Morris de Fox News, Wal-Mart, Craft y, sí, Halliburton».²¹

La conexión histórica entre los grandes monopolios y oligopolios y los instrumentos de Estado se ha venido acentuando en los Estados Unidos. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo, codicias múltiples e intensas, e ímpetu en el alto empresariado petrolero, gasero y eléctrico y, desde luego, en la cúpula del BM, la Casa Blanca y el Pentágono. El Paso, Enron, Halliburton, Bechtel, Shlumberger, Fluor-Daniels, cuyos negocios y en algunos casos (Enron) escándalos de corrupción no parecen haber enfriado los ardores privatizadores del BM y de los gobiernos neoliberales mexicanos, han hecho sus negocios por medio de la oferta de una extensa gama de servicios, que tenía en cuenta, además del gas y electricidad, la subcontratación de actividades de exploración y perforación —lo que convierte a PEMEX, como se contempla en los documentos del Banco Mundial, en un cascarón—, y de las actividades de las aseguradoras y servicios varios. Lo mismo se observa en otras empresas del sector. Por ejemplo, Shell, firma tradicional dedicada al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir el servicio eléctrico en el territorio norteamericano; Electricité de France ahora comercia gas, aunque fuera de ese país. Centrica, el conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas ramas para incursionar en otras áreas.

La motivación de este proceso de integración horizontal es clara. Según Paul Marsh, director de TXU Europe Finance: «una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50% y 75% superior al de las que se dedican a una sola de estas actividades. Con ganancias unitarias de 40 libras esterlinas, comparadas con 25».²²

Codicia y *diktat* energético

Con esas ganancias unitarias «jalando» a burócratas fondomonetaristas y funcionarios venales, además, desde luego, del *peak oil*, se intensifica el ímpetu privatizador que se presenta al público como «reformas de segunda generación del sector energético». El informe reciente de que, por medio de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la Ley de obras públicas, el PAN y el PRI intentan «legalizar» los servicios de energía eléctrica, agua y «seguramente también el petróleo», es sintomático. Según se dio a conocer, se trata de contratos por cincuenta años con empresas nacionales y extranjeras. Varios legisladores de oposición advirtieron sobre el riesgo de permitir a empresas extranjeras firmar contratos con el Gobierno Federal para realizar «todo tipo» de obras y servicios «pasando por encima de lo que señalan las leyes nacionales y la misma Constitución».²³

En medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en la cúpula político-empresarial mexicana, en codicia obsesiva y brutalidad policial-militar: el asalto contra las instalaciones de LyFC es una réplica de los despliegues contra el crimen organizado. Como se evidencia una y otra vez en la historia mexicana, panistas y priístas se han aliado con esos poderosos intereses, de dentro y fuera, en la acometida contra el sector público de la petro-electricidad. Bajo tales auspicios, el influjo del Pentágono-CIA y el brío del BM se acrecientan, en especial en su tarea de abrirle caminos a la poderosa industria de la electricidad, el gas y el petróleo de los Estados Unidos en México. Aunque con las presidencias simultáneas de Bush hijo y Fox parecía que ya el sector energético mexicano «estaba maduro», no es sino hasta una fecha como el mencionado asalto del 10 de octubre de 2009, que Calderón finiquita LyFC, cuando se procede, de manera abierta, con su apropiación a favor del empresariado extranjero y sus «socios» locales.

El paquete de reformas estructurales impulsadas por medio de empréstitos condicionados del FMI-BM y BID, al promover esquemas de *outsourcing* a favor de contratistas nacionales y extranjeros, socavaba el control público nacional de los vastos complejos económico-territoriales, rurales, urbanos y suburbanos involucrados en la operación diaria de PEMEX, CFE y LyFC. El dominio de la nación sobre ese sector es vital para la soberanía y la integridad de la Federación.

Como se muestra en *La compra-venta de México*, por más de veintisiete años, los Estados Unidos han impulsado, desde Los Pinos y la Secretaría de Hacienda, lineamientos en materia económica que, según Joseph Stiglitz (ex-economista principal del BM) desembocan en descabros como el de diciembre de 1994. Son calamidades que debilitan al Estado nacional e impulsan intereses oligárquico-imperiales. Así lo documenta la economista Sarahí Ángeles en un estudio sobre los diseños privatizadores de la industria eléctrica en México.²⁴ Recuerda que en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, anexo a la Carta de Intención enviada al FMI en junio de 1999 por Zedillo, se estipula que el gobierno mexicano «se encuentra en la fase final de su programa de privatización, que incluye servicios de infraestructura, previamente en poder del Estado: puertos, aeropuertos, ferrocarriles, satélites, electricidad y la distribución de gas natural».²⁵

La resistencia del SME a este diseño obstaculiza un proceso que incluye la «liquidación» de LyFC y el desmembramiento de la CFE, para abrirles espacios a empresas norteamericanas y de Canadá, favorecidas en el capítulo 11 del TLCAN. Por ahora se envía a la calle a más de cuarenta mil familias para, según el Diktat del BM,

crear corporaciones de generación múltiple de energía a lo largo de las líneas geográficas o por tipo de planta [...] Establecer una o más corporaciones de transmisión para que sean las propietarias del sistema de transmisión de alto voltaje [...] establecer corporaciones de distribución para que sean propietarias de los sistemas de distribución en cada área para manejar los precios de menudeo de la energía [...] corporatizar Luz y Fuerza del Centro como una compañía de distribución, transfiriendo las plantas generativas a una nueva Compañía de Generación, decidir el grado de participación privada de estas nuevas corporaciones, el cual puede ser desde 0% a 100%, con la mira de incrementar con el tiempo la participación privada [...] Transferir la responsabilidad reguladora de tarifas de la SHCP a la Comisión Reguladora de Energía para todas las entidades que participen en el sector de la energía.

Este es, en síntesis, el motivo y el *modus operandi* de un robo al futuro de los mexicanos. La situación de por sí grave, se hace más lastimosa porque, como lo plantea José Luis Manzo al recordar que el lunes 1 de marzo de 2006 el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y recuperó para el Estado boliviano el control de la industria petrolera, «desde la producción a boca de pozo, hasta la exportación del gas y del petróleo, pasando por el transporte, almacenamiento, distribución, procesamiento industrial y comercialización interna de la producción», México retrocede: «México va, cuando Venezuela y Bolivia están de regreso».²⁶ Aún más, esta inadmisibles regresión ocurre precisamente en momentos en que el país está sometido a lineamientos intervencionistas de corte policial-militar y para-militar (Iniciativa Mérida); cuando, como se apuntó, se degrada la función de Defensa Nacional por el baño de sangre y el desvío y desgaste que ocasiona la «guerra contra el narcotráfico».

Además, el aparato militar y de inteligencia de los Estados Unidos que aplica estos esquemas de intervención y ocupación plantea, en su más reciente evaluación de los escenarios para 2025,²⁷ que en América Latina, el Oriente Medio y Asia, por sobrevivencia, ante las grandes sacudidas de la economía y la política mundial, las naciones toman control de sus recursos naturales y en especial de los relacionados con los estratégicos servicios de la energía. En *Global Trends 2025*, a esto se le denomina *resource nationalism*, articulado por medio de la promoción, ascenso y consolidación de las empresas de propiedad pública. En esas naciones, abrir caminos para el futuro de sus pueblos es prioritario. Aquí también.

Notas

1. La Gran Liga de Electricistas Mexicanos tenía su sede en Monterrey. Para consultar una bien lograda revisión bibliográfica y documental sobre los antecedentes y evolución del SME, desde 1906 hasta nuestros días, véase María Eugenia Valdés Vega, «El

- SME ante la mayor agresión de su historia», *Coyuntura*, n. 153-154, México, DF, septiembre-diciembre de 2009, pp. 21-9. Entre los trabajos sugeridos están Víctor M. Sánchez Sánchez, *Surgimiento del sindicalismo electricista*, FCPS-UNAM, México, DF, 1978; Gustavo A. González, *Desarrollo de la industria eléctrica y del proletariado electricista*, tesis de Licenciatura, FCPS-UNAM, México, DF, 1980; Silvia Gómez Tagle, *Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas*, El Colegio de México, México, DF, 1980.
2. Me he referido extensamente a este proceso en *La compra-venta de México*, Plaza & Janés, México, DF, 2002.
 3. Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, Routledge Paperback, Londres, 1963.
 4. Adopto la expresión verbal «imperializar» porque es una aproximación más exacta a la realidad de las relaciones internacionales, que la de «globalizar», ya que enfatiza el contexto asimétrico de poder y de dominación en que ocurren los procesos internacionales.
 5. Staff/Reforma «Ofrece EU tácticas de contrainsurgencia», *Reforma*, México, DF, 7 de marzo de 2009, p. 7.
 6. Abundantes ejemplos de ello y su papel en la articulación del TLC los ofrece Jeff Faux, *La guerra global de clases (Cómo nos robaron el futuro las élites de Estados Unidos, Canadá y México y qué hacer para recuperarlo)*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, DF, 2008.
 7. Alan Milward, *La Segunda Guerra Mundial*, Crítica, Barcelona, 1987 y Franz Newman *Behemot: teoría y práctica del nacional-socialismo*, FCE, México, DF, 1944.
 8. Jeff Faux, ob. cit.
 9. María Eugenia Valdés Vega, ob. cit.
 10. Me he referido ampliamente a este proceso y retomo ese análisis ofrecido en «Banco Mundial: PEMEX y CFE al hoyo negro», *La Jornada*, México, DF, 19 de septiembre de 2002.
 11. Línea argumental planteada por el historiador Gastón García Cantú desde los primeros intentos de privatización de la petroquímica, retomada en John Saxe-Fernández, *La compra-venta de México*, ed. cit.
 12. María Eugenia Valdés Vega, ob. cit., p. 21.
 13. Ídem. Véase además Víctor Sánchez Sánchez, *Surgimiento del sindicalismo electricista*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, México, DF, 1978.
 14. John Saxe-Fernández, *La compra-venta de México*, ed. cit., pp. 368 y ss.
 15. Ídem.
 16. Department of Energy, *México: Country Brief*, US Government Printing Office, Washington, DC, 2002; citado en John Saxe-Fernández, «Banco Mundial...», ed. cit.; también en *La compra-venta de México*, ed. cit., p. 356.
 17. Ídem.
 18. Al respecto cabe recordar que el proyecto energético de Fox —articulado por medio de Felipe Calderón, a cargo de la cartera de Energía—, fue planteado por Enron: un esquema que, en sus líneas centrales de desmantelamiento del sector público mexicano, persiste con ese funcionario ocupando la oficina presidencial de México.
 19. John Ross, «Halliburton arruina México», *Counter-Punch*, disponible en www.rebelion.org/noticia.php?id?=41643_.
 20. Ídem. Se refiere al TRIFE, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 21. David DeGraw, «Halliburton Steals Mexican Election?», disponible en www.alternet.org/bloggers/degraw/41366.
 22. *Business Week*, septiembre de 2002, citado en John Saxe-Fernández, «Banco Mundial...», ed. cit.
 23. «AN y PRI legalizarán privatización de servicios del Estado, denuncian», *La Jornada*, México, DF, 6 de diciembre de 2009, p. 1.
 24. Sarahí Ángeles Cornejo, «Aplicación de la reforma neoliberal y privatización de la industria eléctrica en México», en John Saxe-Fernández, coord., *La energía en México: situación y alternativas*, CEIICH/UNAM, México, DF, 2009, pp. 267-304.
 25. *Ibidem*, p. 288.
 26. José Luis Manzo, «La privatización reciente de los hidrocarburos en México», en John Saxe-Fernández, coord., *La energía en México...*, ed. cit.
 27. National Intelligence Council, *Global Trends 2025: a Transformed World*, Washington, DC, 2008, disponible en www.gov/nic./NIC_2025_project.html.